



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CPE 1327/2018/9/CFC3

**REGISTRO N°: 102/24.4**

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Javier Carbaño -como Presidente- y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Carlos Alberto Mahiques, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa **CPE 1327/2018/9/CFC3**, caratulada **"Aparicio, Julieta; López Espósito, Matías; y Edu Fran S.A. s/recurso de casación"**; de la que **RESULTA:**

**I.** La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, el 9 de junio de 2023, dispuso: *"I. CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución recurrida en cuando dispuso sobreseer parcialmente a EDU FRAN S.A., a Julieta APARICIO y a Matías LÓPEZ ESPÓSITO, en orden a la omisión de depósito, dentro del plazo legal, de los aportes destinados al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a los períodos fiscales 12/2016 y 9/2017"*.

**II.** Contra dicho pronunciamiento, el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, interpuso recurso



de casación, el que fue denegado por el a quo, lo que motivó la queja ante esta instancia.

Esta Alzada dispuso, por mayoría, "HACER LUGAR a la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, DECLARAR ERRÓNEAMENTE DENEGADO el recurso de casación INTERPUESTO y, en consecuencia, CONCEDERLO, sin costas (arts. 477, 478, 530 y 531 del C.P.P.N.)" (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa nro. CPE 1327/2018/9/RH4, Reg. nro. 1393/23, rta. el 12/10/23).

**III.** El recurrente encarriló su presentación recursiva en el primer supuesto del art. 456 del CPPN, al aducir que se realizó una errónea aplicación del Título IV, Capítulo 1, de la ley 27.541, relativo a la "Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs".

Estimó que dicha normativa no es aplicable al caso, en base a que excluye el acogimiento de deudas al Régimen Nacional de Obras Sociales, como las que integran los sucesos atribuidos a los encausados. Como consecuencia, indicó que los beneficios de la suspensión de la acción penal y de la eventual eximición persecutoria allí contenidos no pueden reconocerse al contribuyente.

El fiscal general calificó como "forzado artificio" la escisión de cada uno de los acontecimientos imputados en dos sub-hechos: las deudas previsionales y las deudas al Régimen Nacional de Obras Sociales, remarcando que los jueces no se encuentran autorizados a dividir una





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

plataforma fáctica compleja para tornar factible una subsunción que -sin dicha manipulación- sería inviable.

Solicitó que se deje sin efecto la resolución recurrida e hizo reserva del caso federal.

**IV.** La parte recurrente mantuvo el recurso de casación.

**V.** En la etapa procesal prevista por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, las partes no hicieron presentaciones.

**VI.** Fijada la audiencia en los términos de los arts. 465, último párrafo, y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, las partes tampoco hicieron presentaciones.

Superada dicha etapa, la causa quedó en condiciones de ser resuelta. Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: doctores Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Carlos Alberto Mahiques.

El **señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:

**I.** Este Tribunal ya se expidió sobre la admisibilidad del remedio procesal, al hacer lugar a la queja interpuesta por la parte recurrente y conceder el recurso de casación, pronunciamiento al



que cabe remitirse por motivos de brevedad (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa nro. CPE 1327/2018/9/RH4, Reg. nro. 1393/23, rta. el 12/10/23).

**II.** Previo a dar tratamiento a los planteos del recurrente, corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes del caso.

El 10 de septiembre de 2020, el titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 4 dispuso, sobreseer parcialmente a Julieta Aparicio, a Matías López Espósito y a Edu Fran S.A., con relación a la omisión presunta de depósito de los aportes al Régimen Nacional de Seguridad Social retenidos por aquella firma a sus dependientes, por los períodos 12/2016 y 9/2017.

Lo hizo tras considerar que, con relación a los aportes previsionales, correspondía decretar la extinción de la acción por resultar procedente el régimen de regularización de la ley 27.541; y, con relación a los aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales, concluyó que los montos retenidos no superaban la suma de 100.000 pesos, necesaria para la configuración del delito tipificado por el artículo 7° previsto en el artículo 279 de la ley 27.430.

El fiscal de primera instancia interpuso recurso de apelación en cumplimiento de la Resolución P.G.N. N° 18/18, por la cual el Procurador General de la Nación instruyó a todos los agentes integrantes del Ministerio Público Fiscal a que se opongan a la aplicación retroactiva de la ley 27.430, en cuanto dispone los aumentos de las sumas





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

de dinero que establecen un límite a la punibilidad de los delitos tributarios y de contrabando.

Como consecuencia de ello, concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal que los hechos bajo análisis deben calificarse con el art. 9 de la ley 24.769, texto según ley 26.735, por ser ésta la norma vigente al momento que tales sucesos se habrían cometido, y que corresponde revocar la resolución recurrida, en cuanto por aquélla se sobreseyó parcialmente en orden a los hechos vinculados a la apropiación indebida de aportes destinados a las obras sociales correspondientes a los periodos 12/2016 y 09/2017.

Por su parte, el señor fiscal general ante la cámara de apelaciones, al presentar el memorial a tenor del art. 454 del C.P.P.N. mantuvo el recurso de apelación e hizo suyos sus argumentos. Además, hizo saber que no correspondía escindir los hechos objeto de investigación -al analizar por separado los dos subsistemas que conforman el Sistema Único de la Seguridad Social- a los fines de aplicar los beneficios previstos por la ley 27.541.

El 19 de noviembre de 2021, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico estimó que, toda vez que la cuestión referida en el párrafo anterior no había sido introducida en el recurso de apelación, no



correspondía su tratamiento. A su vez, convalidó la aplicación del principio de ley penal más benigna sobre los sub-hechos correspondientes a los aportes con destino a las obras sociales involucrados en el caso.

Esta Alzada, con fecha 5 de diciembre de 2022, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación del fiscal general, en contra de la decisión mencionada en el párrafo precedente, y en consecuencia dispuso anularla y remitir las actuaciones a la instancia previa para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Ello, por concluir que se apreciaba como razonable que la cámara de apelaciones, en su función revisora, hubiera analizado la aplicación en el *sub examine* del régimen de "Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs" establecido en la ley 27.541 (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa CPE 1327/2018/8/CFC2, caratulada "Edu Ffran S.A. y otros s/recurso de casación", reg. nro. 1669/2022 -pronunciamiento contra el cual la defensa interpuso un recurso extraordinario, el cual fue declarado inadmisible, por mayoría, cfr. CFCEP, Sala IV, expte. CPE 1327/2018/8/1, reg. nro. 182/23, rta. 8/3/23-).

Devueltas las actuaciones a la cámara de apelaciones, ésta dictó la resolución cuya impugnación por parte del Ministerio Público Fiscal motiva la actual intervención de este Tribunal. Mediante el pronunciamiento recurrido, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

Económico confirmó nuevamente la resolución del juzgado instructor en cuanto sobreseyó a los imputados, en orden a la omisión de depósito, dentro del plazo legal, de los aportes destinados al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a los períodos fiscales 12/2016 y 9/2017 de la sociedad Edu Fran S.A.

El tribunal previo convalidó la escisión de los hechos efectuada por el juzgado instructor, al mismo tiempo que confirmó la extinción de la acción por aplicación de la ley 27.541 a la regularización de los aportes previsionales y, en segundo lugar, ratificó los sobreseimientos de los sub-hechos vinculados a los aportes al régimen de las obras sociales (por no superar sus importes el monto de 100.000 pesos previsto en el art. 7 del art. 279 de la ley 27.430).

Para sustentar su tesitura, el colegiado a quo indicó, "...por el art. 8 de la ley N° 27.541 [...] se permite la adhesión al régimen de regularización previsto por aquella normativa por las obligaciones relativas a los recursos del Régimen Nacional de la Seguridad Social, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la A.F.I.P.-D.G.I., pero se excluyen a los fines de tal acogimiento, entre otros conceptos, a los aportes y



a las contribuciones con destino al Régimen Nacional de las Obras Sociales...".

A partir de ello manifestó que "de manera excepcional a los fines únicos de evaluar la procedencia dela adhesión al régimen de regularización establecido por la ley 27.541 -ya sea en su texto original o modificado por la ley 27.562- por las obligaciones relativas al Régimen Nacional de la Seguridad Social por los períodos mensuales 12/2016, 03/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017 y 10/2017, el suceso único consistente en la omisión de depositar, en el término establecido, los aportes correspondientes a los distintos subsistemas que conforman el Sistema Único de la Seguridad Social por un mismo período mensual, debe ser examinado en función de los distintos conceptos que lo integran. Esto es así pues, tal como se advirtió anteriormente por el presente voto, por la ley 27.541 [...], se escinde conceptualmente el hecho único consistente en la omisión de ingresar, durante un mismo período mensual, la totalidad de los aportes correspondientes a todos los subsistemas que conforman el Sistema Único de la Seguridad Social, al admitirse la regularización de las obligaciones relativas a los recursos de la seguridad social, y excluirse de aquella regularización a los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales, y luego admitirse por la ley 27.562, la extinción de la acción penal derivada de obligaciones entre las que se encuentran las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales, que hubieran sido canceladas con







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

*anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley modificatoria".*

Por último hizo hincapié en que sostener una interpretación distinta llevaría a suponer la incongruencia o imprevisión del legislador, pues en los casos que se adeuden aportes o contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales, los contribuyentes no podrían beneficiarse con lo establecido por la ley 27.541 *"respecto de las obligaciones relativas a ninguno de los subsistemas del Sistema Único de la Seguridad Social"*; por lo tanto *"corresponde examinar en forma separada los rubros correspondientes a los distintos subsistemas que forman parte del Sistema Único de la Seguridad Social"*.

**III.** Efectuada la reseña que antecede, habré de señalar que el art. 9 de la ley 24.769 establece *"Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos (\$20.000) por cada mes..."*.

El Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) fue creado por el art. 85 del decreto 2284/91 y se integra con cinco subsistemas: el previsional,



denominado SIPA; el de salud, que comprende las obras sociales (regidas por la ley 23.660) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Pensionados y Jubilados; el de prestaciones por desempleo; el de asignaciones familiares; y el de riesgos de trabajo.

Al respecto, se expresó: "la seguridad social se presenta como un sistema destinado a proteger a las personas de las contingencias [...] de la vida, desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Este sistema está conformado por subsistemas específicos en función de la naturaleza de la contingencia que están destinados a cubrir". Respecto a cuáles de los rubros que componen el SUSS se encuentran alcanzados por la protección penal "se estableció que sí integraba al concepto de seguridad social [...] el porcentaje retenido correspondiente a los aportes de las obras sociales" (cfr. Mariano Hernán Borinsky, Pablo Nicolás Turano, Magdalena Rodríguez y Daniel Schurjin Almenar "Delitos Tributarios y contra la seguridad social", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2020, págs. 93 y 331).

Ahora bien, el art. 8 de la ley 27.541 (texto según ley 27.562 -B.O. 26/8/20-) dispone que "Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

*julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo...".*

*Esa misma norma prescribe que "...Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales...", con la siguiente previsión: "...Invítase a las obras sociales y a las aseguradoras de riesgos de trabajo a establecer programas de regularización de deudas en condiciones similares a las previstas en el presente capítulo...".*

*A su vez, el primer párrafo del art. 10 de la misma ley 27.541 (modificada por la ley 27.562), determina que "...El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras, los coautores o las coautoras y los partícipes o las partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones respectivas, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la*



etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme".

Por su parte, el segundo párrafo de dicho artículo 10 establece: "La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales..".

Del examen de la normativa citada precedentemente se advierte que, si bien se excluye del régimen de regularización a las deudas por aportes retenidos con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales (art. 8), la propia ley contempla la cancelación de tales conceptos para acceder a los beneficios penales allí establecidos (art. 10, segundo párrafo, texto según ley 27.562).

Desde esta perspectiva no se encuentra suficientemente fundada la contradicción del legislador entre el tipo penal (que incluye la omisión de ingreso de retenciones al Régimen Nacional de Obras Sociales) y las condiciones requeridas para la procedencia de los beneficios del art. 10 de la ley 27.541. En efecto, la norma realiza un tratamiento particularizado respecto de





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

los rubros que integran el Sistema Único de la Seguridad Social que no se traduce en una "escisión conceptual" como lo plantea el tribunal *a quo*, sino que obedecería, en principio, a los diferentes marcos regulatorios de aquellos subsistemas (cfr. voto del suscripto en las siguientes causas: CFCP, Sala IV CPE 1114/2018/10/CFC1 "Jaureguiberry, Horacio Arturo s/ recurso de casación", reg. nro. 1429/2022, rta. el 24/10/22; CPE 119/2018/10/CFC1 "Leadcam S.A. y otros s/recurso de casación", reg. nro. 222/23, rta. el 13/03/23; y CPE 245/2020/2/CFC1, Leadcam S.A. y otros s/recurso de casación, reg. nro. 1050.23, rta. 9/8/23).

Demostrativo de lo expuesto es que *"con relación a las obras sociales los poderes de verificación y fiscalización permanecen en cabeza de dichas entidades de acuerdo a lo previsto en el art. 21 de la ley 23.660"* (cfr. Mariano Hernán Borinsky, Pablo Nicolás Turano, Magdalena Rodríguez y Daniel Schurjin Almenar, ob. cit., pág. 96).

En consecuencia, el análisis a partir del cual el *a quo* concluye erróneamente que corresponde dividir el tipo omisivo previsto en el art. 9 de la ley 24.769 (como solución interpretativa a una aparente contradicción o inconsecuencia normativa) se encuentra desprovisto en el caso de autos de una motivación adecuada que conduce a su descalificación



como acto judicial (Fallos: 301:970; 302:236; 306:262 y 940; 310:799; 311:345, 312:888 y 329:5323). Debe recordarse el principio según el cual compete al Poder Legislativo establecer las disposiciones que contemplen los hechos punibles y las respectivas sanciones, tras su propia apreciación de las conductas reprobables (Fallos: 136:200; 237:636; 275:89; 304:849 y 892, 310:267 y 329:5323).

En base a ello, el sobreseimiento dictado con fundamento en la ley 27.541 (texto según ley 27.562) carece de suficiente sustento; máxime cuando por el momento, no se verificó la cancelación de las deudas al Régimen Nacional de Obras Sociales correspondientes a los períodos aquí involucrados (12/2016 y 9/2017).

**IV.** Por lo expuesto, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General ante el *a quo*, ANULAR la decisión impugnada y, REMITIR las actuaciones al tribunal previo a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).

El **señor juez Javier Carbajo** dijo:

**I.** En orden a la admisibilidad y sin perjuicio de haber indicado oportunamente que la vía directa no resultaba admisible, corresponde estar a lo resuelto mayoritariamente por esta Sala IV al momento de examinar el recurso de queja intentado por el representante del Ministerio Público Fiscal (CPE 1327/2018/9/RH4, Reg. 1393/23, del 12/10/23).





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

**II.** En cuanto a los antecedentes relevantes del caso, habré de remitirme al relevamiento efectuado en el voto del colega que abre el presente Acuerdo.

Sentado lo expuesto, advierto que el pronunciamiento recurrido se encuentra precedido de suficiente fundamentación a tenor de lo normado en el art. 123 del C.P.P.N. y que los agravios de la parte sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos; 302:284; 304:415); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779).

Es que el representante del Ministerio Público Fiscal no trae argumentos novedosos y diversos de aquellos oportunamente considerados por el magistrado de primera instancia y luego, ratificados y reiterados por el tribunal *a quo*.

En efecto, el impugnante discrepa del temperamento adoptado e insiste en señalar que la ley 27.541 no puede aplicarse en el caso de que la comisión del delito previsto en el art. 7 del Régimen Penal Tributario abarque recursos de la seguridad social vinculados con el Régimen Nacional de las Obras Sociales, sin rebatir las



consideraciones expresadas en el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Es por ello posible señalar que los extremos esbozados en el recurso se limitan a expresar una mera discrepancia con el temperamento adoptado que, en modo alguno, legitima la tacha de arbitrariedad invocada.

En segundo lugar, en cuanto a la cuestión de fondo, estimo que la solución propiciada por el tribunal anterior se ajusta a una interpretación sistemática del régimen de regularización instaurado por el legislador en materia de recursos de la seguridad social.

Por un lado, debe observarse que, en su redacción original, el art. 8 de ley 27.541 prevé la oportunidad de regularizar las obligaciones de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre de 2019 o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, excluyendo de aquella posibilidad las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo y los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales.

Mediante la reforma de la ley 27.562 el legislador mantuvo aquel esquema de regularización extendiéndolo a las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020.

En ambos casos, el legislador dispuso expresamente invitar "...a las obras sociales y a las aseguradoras de riesgos de trabajo a establecer programas de regularización de deudas en condiciones similares a las previstas en el presente capítulo...".







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

Adicionalmente, la ley 27.562 estableció en lo que aquí interesa que "...*(l) a cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales...*".

En virtud de ello, se aprecia que no ha sido intención del legislador asumir una posición restrictiva que importe la imposibilidad de regularizar las obligaciones del Régimen Nacional de la Seguridad Social si se registran impagas las obligaciones vinculadas con el Régimen Nacional de las Obras Sociales pues ha propendido a que dichas instituciones adopten similar tesitura.

Tal como se ha indicado, en ambas normas se ha invitado a las Obras Sociales a establecer programas de regularización, respecto de los aportes y contribuciones específicos.



Tal circunstancia se advierte congruente con la autonomía que detentan esos entes de acuerdo con lo normado en la ley 23.660 y evidencia el tratamiento dispar que a los efectos de la ley de regularización el legislador ha previsto para las obligaciones nucleadas en ambos regímenes.

En esa dirección, como se indica en la decisión impugnada, al único y exclusivo efecto de la regularización de las obligaciones de los recursos de la seguridad social y en respeto de la autonomía de los mentados entes, se advierte posible la distinción efectuada con relación a aquellas vinculadas con el Régimen Nacional de las Obras Sociales.

Es que el tratamiento diferenciado deja incólume la persecución del cobro de las deudas del Régimen Nacional de las Obras Sociales en cabeza de dichas entidades, tal como dispone la ley 23.660, invitándolas a ofrecer un marco de regularización, sin que ello obste la posibilidad de recurrir al poder punitivo estatal en los casos en que las obligaciones de aquel subsistema alcancen el elemento cuantitativo previsto en el tipo penal por la suma de pesos cien mil -circunstancia que específicamente fue desechada en el presente caso-.

De adverso, la limitación que propone el representante el Ministerio Público Fiscal, en la práctica, excluiría la mayoría de los casos que el legislador quiso abarcar atendiendo a la descripta situación de emergencia y la tornaría inoperante respecto del sistema de seguridad social.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

Ello así pues el régimen de declaración y pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social abarca ambos subsistemas en examen, es decir, el del Régimen Nacional de la Seguridad Social y el de las Obras Sociales pues, en tal instancia, pese a la autonomía de los entes, el cobro es centralizado por el Fisco que, de modo alguno, asume la ulterior gestión de recaudación en caso de incumplimientos (Cfr. Resolución 2192/2007).

Asumir que el parlamento solo quiso proponer la regularización en los supuestos en que exclusivamente se encuentran pendientes de pago las obligaciones del Régimen Nacional de la Seguridad Social, importaría darle al marco normativo analizado un alcance extremadamente limitado respecto del universo de casos que, de ordinario, se verifican y, en consecuencia, un efecto insustancial en su faz práctica teniendo presente el particular modo de cobro de aquellas cargas.

Tal circunstancia desconocería la situación de emergencia pública no solo en materia económica y financiera, sino también en el orden fiscal, administrativo, previsional y social (cfr. art. 1, ley 27.541) que declara la normativa y el innegable fin, al menos en lo que atañe al Régimen Nacional de Seguridad Social, de lograr la obtención rápida de los fondos adeudados.



Vale destacar que el Máximo Tribunal ha indicado como pauta interpretativa que "...debe indagarse el verdadero alcance de la norma, mediante un examen que otorgue pleno efecto a su finalidad (Fallos: 342:667) y que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia (Fallos: 323:3289, considerando 4° y sus citas, entre otros)..." (Fallos: 345:849).

Desde esa perspectiva, se observa que el a quo ha dado argumentos suficientes respecto de la exegesis normativa aplicada y, más allá de las discrepancias del recurrente con la solución a la que se arribó, los agravios expuestos en su recurso no conmueven el criterio adoptado que satisface adecuadamente la máxima de razonabilidad atendiendo a los especiales fines que informan el régimen normativo examinado.

**III.** En virtud de lo expuesto, corresponde RECHAZAR el recurso de casación intentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.). TENER PRESENTE las reservas del caso federal formulada.

El **señor juez doctor Carlos A. Mahiques** dijo:

Por compartir, en lo sustancial, el análisis y las consideraciones expuestas por el primer ponente, adhiero a la solución propuesta.

Como sostuve en la causa n° CPE 245/2020/2/CFC1, *Leadcam SA s/recurso de casación*,





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

reg. nro. 1050/23.4, rta. el 9 de agosto del corriente año, la escisión conceptual de un hecho único -la apropiación indebida de aportes de la Seguridad Social- como solución interpretativa a una aparente contradicción normativa, no resulta ajustada a derecho, ni aun de modo excepcional. La creación de regímenes de regularización para los diversos subsistemas que integran el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), no habilita a desarticular la persecución penal de un delito sancionado como hecho único por la ley 24.769.

Es que, la distinción prevista en el art. 8 de la ley 27.541 no colisiona con la letra del art. 9 de la ley 24.769, en tanto obedece a los distintos marcos regulatorios de los subsistemas que componen el SUSS y los diversos organismos de verificación y fiscalización establecidos al efecto. Por su parte, la persecución penal del delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social establecido en el art. 9 de la ley 24.769, se vincula con la afectación que provoca tal conducta al Sistema de Seguridad Social en su conjunto, entendido como sistema técnico-jurídico que protege a la población, desde la concepción hasta su muerte, de ciertos riesgos o contingencias biológicas, patológicas y/o económicas.



Por lo demás, de conformidad con el criterio establecido en diversos precedentes, para aplicar los beneficios establecidos por la ley 27.541 es necesario comprobar que las deudas vinculadas con los recursos de la seguridad social se regularizaron y/o cancelaron, conforme los requisitos establecidos por la norma y las respectivas reglamentaciones. En el caso, el tribunal a quo dejó expresamente asentado que las deudas por obras sociales no se encontraban canceladas a la fecha de la resolución lo que evidencia la imposibilidad de aplicar el mentado régimen, por no haber cumplido el contribuyente con las exigencias legales del instituto en cuestión.

Tal es mi voto.

En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:**

**HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General ante el a quo, **ANULAR** la decisión impugnada y, **REMITIR** las actuaciones al tribunal previo a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

**Firmado: Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Carlos A. Mahiques.**





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4  
CPE 1327/2018/9/CFC3

**Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de  
Cámara.**

---

Fecha de firma: 27/02/2024

Alta en sistema: 28/02/2024

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38107823#401159208#20240227110718479